



Epistemological Others, Languages, Literatures, Exchanges and Societies Journal n°14, février 2026

ISSN 2271-6386

Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC)
Université Le Havre Normandie, France

**LOS PROLEGÓMENOS DEL NEOLIBERALISMO EN EL PERÚ:
LAS MEDIDAS LIBERALES DEL GOBIERNO DE MORALES BERMÚDEZ,
ENTRE PAQUETAZOS Y RESISTENCIAS POPULARES (1975-1980)**

Víctor Aguirre Aroni¹

Resumen

En el presente texto analizaremos las medidas liberales impuestas por el régimen de Morales Bermúdez y las resistencias a los denominados paquetazos económicos que se dieron en el Perú a finales de los años 70. Si bien es cierto en el Perú el neoliberalismo se implementa de forma plena en los años 90, durante los años 70 vemos la implementación de medidas liberales o los prolegómenos al neoliberalismo, estas medidas fueron implementadas por diversos ministros de economía con el respaldo o bajo la presión del FMI, todo ello a la saga de la dictadura militar de Morales Bermúdez. Por ello, responderemos la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto los movimientos sociales de los años 70 lograron resistir las medidas liberales del gobierno de Morales Bermúdez? Tomando en cuenta el análisis de las estructuras económicas y sociales, producto de la evaluación de diversas fuentes.

Palabras clave: Neoliberalismo, Paquetazos económicos, Movimientos sociales, Morales Bermúdez, Resistencia popular

Abstract

This text analyses the liberal measures imposed by the Morales Bermúdez regime and the resistance to the so-called economic packages that occurred in Peru in the late 1970s. While it is true that neoliberalism was fully implemented in Peru in the 1990s, during the 1970s we observe the implementation of liberal measures or the prolegomena to neoliberalism. These measures were implemented by various Ministers of Economy with the support or under pressure from the IMF, all following the military dictatorship of Morales Bermúdez. Therefore, we will answer the following question: To what extent did the social movements of the 1970s manage to resist the liberal measures of the Morales Bermúdez government? Taking into account the analysis of economic and social structures, resulting from the evaluation of various sources.

Keywords: Neoliberalism, Economic packages, Social movements, Morales Bermúdez, Popular resistance.

¹ Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima, Perú.

Introducción

La llegada al poder de Francisco Morales Bermúdez en el Perú marca un momento clave en la historia política y social del país durante la década de 1970. Morales Bermúdez asumió la presidencia tras liderar un golpe militar conocido como el “Tacnazo” en agosto de 1975, que derrocó al entonces presidente Juan Velasco Alvarado, en un contexto de crisis económica internacional, polarización política y desgaste del régimen militar inicial.

El cambio de mando se produce en un periodo donde el gobierno de Velasco había perdido apoyos debido a la crisis económica y a las protestas sociales masivas, incluida una huelga policial con graves disturbios. Como señala Zapata (2018), Morales Bermúdez emergió en un escenario de conflicto interno dentro del propio régimen militar, con un discurso inicial orientado a "profundizar las reformas velasquistas", aunque pronto evidenció un giro en su política hacia una línea más conservadora (Contreras y Cueto, 2013). Dicho giro se reflejó en cambios significativos en la política económica y la administración pública.

En el ámbito sociopolítico, Morales Bermúdez gobernó bajo un régimen dictatorial que restringió libertades civiles y derechos humanos, suspendiendo garantías constitucionales, censurando medios de comunicación y enfrentando severas denuncias por violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La Transición Conservadora

El sociólogo Nicolas Lynch (1992), considera la llegada de Morales Bermúdez al poder como un momento de transición conservadora, entre el reformismo revolucionario militar y un proceso de ajuste económico liberal o neoliberal bajo control represivo, con un impacto duradero en la historia peruana que incluyó la profundización de la crisis social. Así, este periodo encarna la tensión entre reformas liberales, autoritarismo y protestas sociales (Contreras y Cueto, 2013).

La llegada de Francisco Morales Bermúdez al poder en Perú en 1975 significó un giro en la orientación de la política económica del país en contraste con el anterior régimen de Juan Velasco Alvarado. Mientras el gobierno de Velasco se caracterizó por un proyecto reformista y estatista con nacionalizaciones, reforma agraria y un intento por construir un modelo económico autónomo, Morales Bermúdez inauguró un periodo de

ajuste económico liberalizante que apuntó a la estabilidad macroeconómica y la apertura al capital extranjero.

El régimen de Velasco impulsó una serie de reformas revolucionarias entre 1968 y 1975, destacando la nacionalización de recursos estratégicos, la expropiación de empresas transnacionales como la IPC, y la reforma agraria orientada a redistribuir la propiedad de la tierra (Rojas, 2024). Esta política estuvo acompañada por la creación de empresas públicas y un esfuerzo por fomentar la participación de trabajadores en la gestión y leyes a favor de la estabilidad laboral.

En contraste, Morales Bermúdez aplicó un cambio de rumbo drástico. Aunque inicialmente declaró su intención de continuar las reformas, pronto se deshizo de los sectores “de izquierda” dentro del régimen y detuvo la mayoría de los procesos reformistas (Lynch, 1992). La política económica bajo su mandato estuvo marcada por planes de emergencia, con medidas para controlar la inflación y el déficit fiscal que implicaron recortes en el gasto público y liberalización económica, en sintonía con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y un giro hacia el liberalismo o neoliberalismo (Jiménez, 2010).

La política económica del régimen de Morales Bermúdez

Desde la perspectiva económica, el gobierno de Morales Bermúdez significó un cambio drástico que se apartó de las reformas estatistas de Velasco para adoptar un enfoque vinculado con la aparición del modelo neoliberal, con medidas orientadas a estabilizar la economía y abrirla al mercado. Por ejemplo, bajo la dirección del ministro de Economía Walter Piazza, se aplicaron planes de emergencia para controlar la inflación y el déficit fiscal mediante el recorte del gasto público y la elevación de precios de servicios básicos, acciones que profundizaron la crisis y generaron creciente rechazo social (Jiménez, 2010). Estas políticas protagonizaron una tensión entre la búsqueda de estabilidad macroeconómica y el fuerte daño a las condiciones de vida, atentando contra sectores populares y generando grandes protestas, como el paro del 19 de julio de 1977 (Valladares, 2013).

Morales Bermúdez inició su gestión con una economía en estado de deterioro, con un déficit fiscal creciente, alta inflación y una deuda externa que saltó de 900 millones de dólares en 1970 a 8,000 millones en 1978 (El País, 2025). Ante esta emergencia financiera, el FMI condicionó la concesión de créditos a la aplicación de severos ajustes económicos que implicaron recortes en el gasto público, despidos masivos de empleados

estatales (alrededor de 60,000 personas) y aumentos significativos en los precios de los productos de consumo básico (El País, 2025).

Los planes de emergencia aplicados entre 1975 a 1980 bajo la gestión de los empresarios a cargo del ministerio de economía representó un giro hacia políticas ortodoxas liberales o neoliberales que buscaban detener la inflación y el déficit, pero que generaron grandes protestas y una crisis social profunda: “El gobierno de Morales Bermúdez respondió a la situación económica implementando lo que podría llamarse un programa de ajuste neoliberal: medidas de austeridad, aumentos de precios de bienes y servicios básicos, devaluación de la moneda y la eliminación de muchas restricciones a la importación” (Lust, 1992).

La Intervención del FMI

La intervención del FMI y la consecuente aplicación de medidas de austeridad discutidas y aceptadas por el gobierno de Morales Bermúdez se tradujeron en un incremento de la conflictividad social y una erosión de legitimidad del régimen militar. Como señala Stephens (2010) “las imposiciones externas del FMI atizaron la violencia social y profundizaron la crisis de la dictadura, haciendo inevitable la posterior transición”.

Este proceso de ajuste económico también significó un cambio en la orientación de la política económica peruana hacia el liberalismo, alejándose de las políticas estatistas de Velasco Alvarado. La intervención del FMI, además de condicionar los préstamos, impuso una agenda de reformas estructurales que incluían, lo que señalamos anteriormente, la reducción del gasto público y reformas al sector financiero, con una clara intención de estabilizar la macroeconomía en un contexto de fuerte endeudamiento y desconfianza internacional.

En síntesis, la intervención del FMI durante el gobierno de Morales Bermúdez se tradujo en la imposición de políticas económicas de ajuste estructural con graves efectos sociales y políticos, que marcaron el fin de la dictadura militar y el inicio de un proceso de transición política.

La Gestión de Luis Barua

El nombramiento de Luis Barúa Castañeda como ministro de Economía y Finanzas marcó un punto relevante en la gestión económica del Perú entre 1975 y 1977. Proveniente del ámbito financiero y con experiencia en organismos multilaterales, Barúa impulsó las primeras medidas conocidas como "paquetazos" en el Perú, una serie de ajustes económicos drásticos para controlar la crisis fiscal. Según Hugo Wiener, "Barúa inauguró en el Perú la práctica de los paquetazos, medidas de recorte de subsidios que incidieron sobre los niveles de precios y la carestía que se observaba en todo el país" (Wiener, 2023). Esta política estuvo alineada con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la recuperación de la disciplina fiscal y negociaciones con los acreedores internacionales.

Sin embargo, la gestión de Barúa también estuvo marcada por tensiones políticas internas. Como señala el político Alfredo Filomeno, "los esfuerzos de Barúa por contar con el apoyo del FMI se enfrentaron a discrepancias en el seno del gabinete, con sectores del gobierno que no apoyaron sus medidas. Esto llevó a su renuncia en mayo de 1977" (Filomeno, 2017). La renuncia fue una consecuencia directa de la falta de consenso político frente a la aplicación del programa de ajuste económico (Durand, 1982).

Durand destaca que, aunque las medidas de Barúa pretendían estabilizar la economía, tuvieron un alto costo social, con aumentos de precios y reducción del poder adquisitivo que incrementaron la conflictividad social. Las protestas y huelgas que emergieron reflejaron la resistencia popular a estas políticas de austeridad, evidenciando la complejidad y fragilidad de la etapa económica (Sulmont, 1981) estas protestas fueron reprimidas por el régimen con estados de emergencia y un estado policiaco.

En suma, la gestión de Luis Barúa Castañeda marca el inicio de la transición del Perú hacia políticas económicas liberales o neoliberales y de ajuste estructural. Su gestión refleja las tensiones entre la necesidad de estabilización económica y las limitaciones políticas y sociales de un régimen militar en crisis.

La Gestión de Walter Piazza

La gestión del ministro de economía Walter Piazza Tanguis durante el régimen de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) fue breve, pero significativa ante una coyuntura económica compleja en el Perú. Asumió el cargo en mayo de 1977 en medio de la continuidad de la severa crisis caracterizada por creciente inflación, déficit fiscal, falta de liquidez en el sector privado y desequilibrios en la balanza de pagos. Piazza

planteó profundizar el programa de emergencia económico que incluía reducción del gasto público, alza en los precios de combustibles, disminución de importaciones estatales, ajustes en la tasa de cambio, y reducción de subsidios, además de buscar créditos externos (Valladares, 2013). Sin embargo, su gestión careció de respaldo político dentro de la cúpula militar y tuvo que renunciar después de apenas 50 días en el cargo (Durand, 1982).

Walter Piazza en su mensaje a la nación del 10 de junio de 1977, impuso un severo ajuste económico que afectó la canasta básica familiar y el costo de vida. Las respuestas sociales fueron tensas, con paros y huelgas en regiones como Puno y Arequipa, evidenciando rechazo a las políticas de ajuste (Valladares, 2013). El FMI apoyó inicialmente sus propuestas, pero el sector militar no dimensionó la respuesta en la protesta social.

Piazza representaba una visión económica liberal, influida por su formación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y por economistas como Paul Samuelson, Adam Smith, Friedrich Hayek y Milton Friedman. Defendió la idea de que el desarrollo del país debía basarse en el liberalismo económico, promoviendo mercados amplios y la integración de la población al mercado.

Piazza representó los intereses de los principales sectores empresariales, en alianza con el FMI, sin embargo, desde la perspectiva liberal, dentro del seno del consejo de ministro chocó con los intereses de diversos sectores de las FF.AA. Por ello, Ortiz de Zevallos, F. (s.f.) menciona "Un gabinete confundido, falazmente ilusionado por un endeudamiento público ya insostenible, rechazó irresponsablemente su propuesta, lo que ocasionó su renuncia".

La corta gestión de Piazza terminó en renuncia producto de un cóctel de circunstancias, entre ellas, la protesta social, el no llegar a acuerdos concretos con el FMI, así como la falta de sintonía entre sus propuestas más duras y los intereses políticos y militares del gobierno de Morales Bermúdez. En resumen, Walter Piazza Tanguis fue un ministro con una concepción económica liberal, enfrentado a un contexto político adverso y a un gobierno militar en desgaste.

La Gestión de Alcibiades Saenz

El general Alcibiades Sáenz Barsallo fue ministro de Economía y Finanzas, desde julio de 1977 hasta mayo de 1978. Su gestión se caracterizó por la continuidad de la inflación, crisis monetaria severa, déficit fiscal, escasez de divisas y fuerte conflictividad social, particularmente marcada por el paro nacional de julio de 1977, que evidenció el rechazo popular a las medidas de ajuste dadas por Piazza.

El 10 de octubre de 1977, Sáenz Barsallo presentó un nuevo programa económico que él mismo definió como "duro" y "austero", con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este plan abarcaba de 1977 a 1979, pero no cumplió sus objetivos a largo plazo, y contemplaba la reducción del gasto público, contención del gasto estatal, control de la inflación y la estabilización del tipo de cambio a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, las críticas tanto de los especialistas como del propio FMI consideraban estas metas como "punitivas e incumplibles". La tensión entre el gobierno y el FMI llevó incluso a la declaración de persona non grata de la representante del organismo financiero. Bajo el mandato de Sáenz, la economía peruana enfrentó una escalada acelerada de la inflación y una devaluación descontrolada, en un marco de agotamiento de las reservas internacionales y falta de crédito externo (Durand, 1992).

Sáenz Barsallo, siendo militar y parte de esta administración, tuvo la tarea compleja de imponer políticas de ajuste en un escenario de fuerte oposición de los movimientos sindicales y sociales, que incrementaron sus demandas tras la represión del paro de 1977. La política económica restringió derechos laborales y salarios, ampliando el conflicto social. La débil base política y la creciente inestabilidad motivaron la renuncia de Sáenz en mayo de 1978, siendo sucedido por Javier Silva Ruete.

La gestión económica del general Alcibiades Sáenz y su programa de austeridad, aunque impulsado y avalado por el FMI, no logró estabilizar la economía ni frenar la inflación, siendo recibido con rechazo y conflictividad creciente. Esto llevó a su renuncia y a la continuidad de la crisis hasta el fin del régimen militar en 1980.

La Gestión de Javier Silva Ruete

Javier Silva Ruete asumió la cartera de Ministro de Economía y Finanzas del Perú el 15 de mayo de 1978, en medio de paros nacionales y elecciones convocadas para una Asamblea Constituyente, en un momento de continuidad de la crisis económica. Cuando Silva Ruete asumió, el Perú se encontraba quebrado debido al bajo precio del cobre y a los altos precios del petróleo (Jiménez, 2010). Heredó un país descrito anteriormente,

inflación alta, déficit fiscal persistente, bajo crecimiento económico y agotamiento de las reservas internacionales. Además, enfrentaba la presión de movimientos sociales y sindicales movilizadas principalmente contra las políticas de recorte y ajuste de períodos anteriores, así como la necesidad política de preparar la salida de un régimen militar que ya no contaba con apoyo popular ni militar pleno.

La gestión de Silva Ruete profundizó los ajustes, con nuevos paquetazos económicos, adicionalmente implementa medidas para controlar la inflación, restringir el gasto público y promover la productividad exportadora, elevando las exportaciones de productos mineros y exportaciones no tradicionales, que ayudaron en su planes de reacomodos económicos. Se destacan iniciativas como la reforma del CERTEX para incentivar las exportaciones, así como reformas que racionalizaron el presupuesto y redujeron el déficit fiscal, todo ello de la mano de un equipo económico que tomó el nombre de "Cosmos" (Durand,1982). Bajo su gestión la inflación fue contenida hasta niveles considerados manejables para la época (aproximadamente un 24% anual). Su estilo fue tecnocrático y pragmático, desde un enfoque macroeconómico "introdujo una elevada dosis de racionalidad tecno-burocrática en el manejo de la economía pública" que repercutió en la estabilización económica" (Zapata, 2012), sin embargo, las economías familiares fueron las que cargaron el peso de las consecuencias de las medidas.

Silva Ruete asumió también un papel importante en la política, colaborando con Morales Bermúdez en la transición política, estableciendo negociaciones con diversos actores políticos de la transición, lo que desde la perspectiva de Durand (1982) significó que el gobierno deje de ser el centro de ataque y la constituyente sea el nuevo centro de atención, pero sin capacidad resolutive. Si bien sus políticas contribuyeron a frenar la crisis económica en índices macroeconómicos, también continuaron afectando los derechos y condiciones laborales de amplios sectores, lo que mantuvo un ambiente de conflictividad social latente.

La gestión de Javier Silva Ruete fue una administración marcada por acuerdos con las élites, resolviendo diversos conflictos con el FMI y diversos sectores de la clase dominante, esto lo convirtió en uno de los ministros clave para entender la evolución del Perú en los años finales del autoritarismo militar y la preparación del terreno para la transición política.

Reacción ante las medidas

Los ajustes económicos generaron tensiones sociales y protestas, pues las políticas de austeridad afectaron directamente a los sectores populares, aumentando la desigualdad y la conflictividad laboral.

El plan de emergencia promovido en 1977 por el ministro Walter Piazza, conocido como el paquetazo Piazza, implementó recortes en el gasto público, afectando los servicios estatales, y elevó precios de combustibles, lo que incide en el aumento generalizado de precios de primera necesidad. Esto provocó rechazo social y protestas como el Paro Nacional de julio de 1977, antes mencionado, donde más muchos pobladores fueron muertos y heridos, pero presionó al régimen para afrontar una salida política (Valladares, 2013).

Estos paquetazos desataron un aumento en la conflictividad e incrementaron la represión estatal. Se produjo la criminalización de huelgas y protestas, lo que llevó a un debilitamiento del movimiento sindical y al radicalismo político de diversos sectores de la izquierda peruana. El impacto social negativo de los ajustes fue determinante para la pérdida de legitimidad del régimen.

Las medidas provocaron un estallido social sin precedentes, como el paro nacional convocado por el Comando Nacional de Lucha, integrado por la CGTP y demás sindicatos, que paralizó todo el país, reflejando el repudio hacia la dictadura y sus políticas económicas (Valladares, 2013). Este paro, motivado por la demanda de ajuste salarial acorde al alza del costo de vida, juntó sectores sindicales y sociales en una protesta multitudinaria pese a la censura y represión gubernamental.

El gobierno respondió con medidas represivas severas. El decreto supremo 10-77-TR autorizó el despido masivo de dirigentes sindicales, y se impusieron estados de emergencia y toques de queda para contener la protesta social (Valladares, 2013). Según la central sindical CGTP, “aunque la clase obrera no tomó el poder, logró una batalla histórica que evidenció la resistencia popular frente al ajuste y la dictadura” (CGTP, 2022). Las movilizaciones se extendieron por todo el país, con numerosos enfrentamientos, detenciones, y desapariciones, en un marco de creciente conflictividad social.

Estas protestas y movilizaciones reflejan no solo el rechazo a las políticas económicas sino también la construcción de una nueva conciencia social y política anti-dictatorial. Los movimientos sociales y sindicatos jugaron un papel protagónico en el debilitamiento del régimen militar, aunque la represión y la fragmentación limitaron las

posibilidades de un cambio inmediato (Stephens, 2010). Sin embargo, las protestas forzaron al régimen a convocar una Asamblea Constituyente en 1978 como respuesta a la presión social.

Los movimientos sociales

Los movimientos sociales del Perú en esta etapa desarrollaron una resistencia importante frente a las políticas de Morales Bermúdez. Estos movimientos estuvieron formados por sindicatos, frentes populares y grupos vinculados a la izquierda, quienes, a pesar de las fuertes limitaciones y la represión estatal, mantuvieron una movilización activa y sostenida. Por ejemplo, el Comando Unitario de Lucha - CUL, con la participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP, la Federación Nacional de Obreros Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, La Federación Metalúrgica FETIM, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú SUTEP, entre tantas organizaciones sindicales florecieron en la época y expresaron un rechazo contundente a las medidas económicas y mostraron su solidaridad con otros sectores sindicales que protagonizaron huelgas y protestas a lo largo del país (Stephens, 2010).

Más allá de la represión, la movilización popular fue capaz de frenar algunas de las propuestas de reformas liberales, pero no todas, ya que el movimiento social también fue duramente castigado. Sin embargo, obligó al régimen a convocar la Asamblea Constituyente en 1978 (Sulmot, 1981), que sentó las bases para la transición política que culminó en las elecciones generales de 1980. Otra dificultad fue que los movimientos sociales enfrentaron trabas para consolidar una alternativa política unificada, en parte por la fragmentación interna y la fuerte presión del aparato estatal. La izquierda, aunque fortalecida en su capacidad movilizadora, no logró construir una propuesta política conjunta de largo alcance (Stephens, 2010).

Por ende, los movimientos sociales en el Perú durante el gobierno de Morales Bermúdez (1975-1980) se caracterizaron por una resistencia significativa frente a las políticas liberales y represivas del régimen. La gran movilización sindical y popular fue clave para la crisis y eventual desgaste del gobierno militar, impulsando el proceso de transición política. Sin embargo, esta resistencia no logró articular suficiente fuerza política para ofrecer una alternativa integral, reflejando las complejidades y tensiones del contexto peruano de la época.

¿Transición Democrática?

Desde la sociología política se observa que las medidas de austeridad y la represión de movimientos sociales por parte del Estado erosionaron la legitimidad del régimen y dieron paso a la emergencia de nuevas formas de oposición y movilización ciudadana (Sulmont, 1981). En conjunto, estos factores no solo marcaron un cambio en la economía peruana, sino que también aceleraron la transición política.

El régimen militar enfrentó una etapa decisiva de transición política en respuesta a la presión social y la necesidad de restablecer la legitimidad política, Morales Bermúdez convocó a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente, cuya misión principal fue redactar una nueva Constitución que sentará las bases para las elecciones de 1980 y la retirada de los militares a los cuarteles.

La Asamblea Constituyente, instalada el 28 de julio de 1978, contó con representantes elegidos en comicios donde los partidos con más constituyentes fueron el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, sin embargo, la izquierda dio una sorpresa al lograr un 30% de adhesiones sumando sus diversas plataformas políticas.

La transición política ocurrida al final del gobierno de Morales Bermúdez no puede entenderse como un proceso verdadero de democratización, sino como una transición controlada y dirigida para salvaguardar el poder de las FF.AA. y de las clases dominantes. La Asamblea Constituyente en 1978, lejos de representar una apertura real para incorporar las demandas sociales, funcionó como una estrategia de contención y canalización de la presión social creciente, agotada la vía represiva directa (Durand, 1982 y Stephens, 2010).

El proceso estuvo marcado por la exclusión política en la toma de decisiones de los sectores más organizados y movilizadas, principalmente los sindicatos, campesinos y agrupaciones de izquierda, que fueron objeto de represión, despidos masivos y criminalización. Esto evidencia que la transición nunca fue inclusiva ni democrática en un sentido profundo, sino un repliegue táctico que priorizó la estabilidad y restauración del poder hegemónico de las clases dominantes. Por ello, la democracia formal implementada no logró resolver las contradicciones estructurales del país. Este texto constitucional, promulgado el 12 de julio de 1979, si bien reconoció algunos derechos para los trabajadores no significó un cambio sustancial en sus condiciones socioeconómicas (Sulmont, 1981).

Impacto a Corto y largo plazo

El gobierno de Francisco Morales Bermúdez marcó un periodo crítico de ajustes económicos en Perú, caracterizado por la implementación de políticas liberales de austeridad. Estas medidas tuvieron un impacto significativo tanto a corto como a largo plazo en la estructura socioeconómica del país.

A corto plazo, las políticas económicas impulsadas por Morales Bermúdez, bajo la supervisión de sus ministros de economía, buscaron controlar la inflación y reducir el déficit fiscal mediante recortes en el gasto público y aumentos en precios básicos como los combustibles. Estas medidas provocaron un empobrecimiento de amplios sectores de la población, generando movilizaciones y enfrentamientos sociales, como el paro nacional de julio de 1977.

Estas políticas y medidas represivas produjeron asimismo una desestructuración del movimiento sindical y un endurecimiento de las condiciones laborales, fruto del Decreto Supremo 10-77-TR que propició despidos masivos, especialmente de dirigentes sindicales (Sulmont, 1981). Esta combinación de ajuste económico y represión social profundizó la crisis de legitimidad del régimen militar, acelerando su declive y alentando la transición política (Stephens, 2010).

A largo plazo, el impacto es complejo y multifacético. La estabilización fiscal, a costa de los sectores más vulnerables y precarios, permitió al Perú recuperar parcialmente los índices de confianza macroeconómicas de inversionistas y organismos multilaterales como el FMI, aunque la crisis estructural persistió y la economía permaneció estancada en ciertos sectores.

Además, las políticas aplicadas en este periodo sentaron las bases para la apertura económica liberal y la implementación de los modelos neoliberales posteriores, así como priorizar sectores primario exportadores en desmedro de la industria (Durand, 1982). Finalmente, la agudización de las tensiones sociales y políticas derivadas de estas políticas económicas se consideró un antecedente para el radicalismo político previo al conflicto armado interno, exacerbando la violencia política que marcaría al país en la década siguiente (Stephens, 2010).

En resumen, las políticas económicas del gobierno de Morales Bermúdez tuvieron un impacto inmediato negativo sobre la población vulnerable y la clase trabajadora, a la vez que hicieron posible cierta estabilización macroeconómica. A largo plazo, sus efectos fueron ambivalentes: generaron condiciones para transformaciones estructurales, pero

también contribuyeron a profundizar problemas estructurales y conflictos sociales que afectaron el desarrollo del Perú en décadas posteriores.

Conclusiones

El gobierno de Morales Bermúdez, desde sus inicios enfrentó un periodo de crisis económica, y se construye como un proyecto de desmontaje del proceso reformista anterior, así como inicia la implementación de los ajustes dictados por el FMI, así como la implementación de reformas estructurales que cambiarán la estructura económica social del país, y sentará las bases del neoliberalismo en el Perú.

El gobierno de Morales Bermúdez se orientó a políticas de ajuste estructural que chocaron con los intereses populares. Las marchas, huelgas y expresiones de protesta fueron respuestas directas a las medidas de flexibilización laboral y liberalización de la economía que endurecieron la crisis económica. Según las fuentes analizadas, la izquierda y los sindicatos tuvieron un rol fundamental en la oposición al régimen, aunque la represión y las limitaciones impuestas desde el poder militar dificultaron la consolidación de una fuerza política unificada que pudiera proponer una salida diferente a la crisis.

A pesar de la fuerte represión, incluyendo las declaraciones constantes de estado de emergencia con toque de queda nacional, el movimiento sindical y los frentes populares lograron articular resistencia significativa, manteniendo la protesta social como un elemento constante del escenario político. Un hito importante de este proceso fue el paro del 19 de Julio de 1977 dirigido por el Comando Unitario de Lucha - CUL, con la participación de la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP, El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú - SUTEP, y diversas Federaciones obreras, donde manifestaron un rechazo contundente a las políticas liberales.

Los ajustes o también llamados paquetazos económicos, trajeron como respuesta una ola huelguística en el país. Caracterizada por paros nacionales y huelgas se sectores claves. Sin embargo, las medidas económicas solo retrocedieron levemente y se siguieron implementando, de la mano de desmovilizar a la población implementando una dura represión a dirigentes (despidos y deportaciones, así como evitar las movilizaciones con toques de queda y otros), asimismo se buscar desviar la atención con conflictos externos, en aras de la unidad nacional, por último, se implementaron mecanismo de transición política, por medio de la asamblea constituyente y la convocatoria de elecciones para 1980, lo que llevo a que la presión ya no se centre en los ajustes, sino en la implementación de la transición. Sin embargo, la asamblea constituyente a pesar de

expresar la inconformidad con el régimen también sirvió como un fuga de escape a la presión social sin dar salidas concretas a las demandas populares, a pesar de la presencia de los partidos de izquierda, la mayoría la tenía el APRA y el PPC, que evitaron la confrontación con el gobierno y sus medidas, y apoyaron la desmovilización de las protestas.

No obstante, esta resistencia se enfrentó a limitaciones sustantivas. La represión estatal y la fragmentación interna de los movimientos sociales y políticos dificultaron el desarrollo de una propuesta política alternativa que pudiera capitalizar el descontento popular en una fuerza política que superara la crisis definitiva del régimen militar. El aislamiento del gobierno y la crisis prolongada abrieron paso a la transición, pero el carácter fragmentado y localista de las protestas también refleja las dificultades para establecer una resistencia efectiva a nivel nacional, a pesar de la efectividad de los paros nacionales en su momento.

En síntesis, los movimientos sociales en el Perú durante los años 70 lograron resistir parcialmente las medidas liberales del gobierno de Morales Bermúdez mediante huelgas, marchas y protestas que forzaron al régimen a convocar elecciones y asumir una transición política. Sin embargo, esta resistencia no fue plena ni unificada, debido a la represión y a la falta de una alternativa política sólida que canalizara eficazmente el descontento social. Asimismo, muchas de las medidas dadas por el régimen cimentaron reformas estructurales que posteriormente serían la base del neoliberalismo en el Perú.

Bibliografía

- Ames Cobián, Rolando. "Gran Burguesía y Movimiento popular". *¿Qué Hacer?*, no. 5, 1980.
- Confederación General de Trabajadores del Perú. "Histórico paro nacional del 19 de julio de 1977: ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron?" *CGTP*, 2 agosto 2022, <https://www.cgtp.org.pe/2022/08/02/historico-paro-nacional-del-19-de-julio-de-1977-quienes-ganaron-y-quienes-perdieron/>.
- Contreras Carranza, Carlos, y Cueto Caballero, Marcos. *Historia del Perú contemporáneo*. Instituto de Estudios Peruanos, 2013.
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. "El fin del reformismo y la lucha por la democracia (1975–1980)". *DESCO*, 2025, <https://www.desco.org.pe/el-fin-del-reformismo-y-la-lucha-por-la-democracia-19751980>.
- Durand Arp-Nissen, José Francisco. *La década frustrada. Los industriales y el poder 1970-1980*. DESCO, 1982.
- "Grave crisis social en Perú por las exigencias del FMI". *El País*, 25 julio 2025, https://elpais.com/diario/1978/08/18/internacional/272239214_850215.html.
- Filomeno, Alfredo. "19 de julio de 1977: Primeras impresiones del paro". *Crónicas del Siglo Pasado*, 18 julio 2017, <https://cronicasdelsiglopasado.blogspot.com/2017/07/19-de-julio-de-1977-primeras.html>.
- Iguñiz, Javier, et al. *Los Ajustes Perú 1975-1992*. Fundación Friedrich Ebert, 1993.
- Jiménez Jaimes, Félix Ovidio. *La economía peruana del último medio siglo: ensayos de interpretación*. CISEPA PUCP, 2010.
- Lust, Jan. "Un análisis marxista del desarrollo económico del capitalismo en el Perú". *La Otra Mirada*, 2021, <https://otramirada.pe/un-an%C3%A1lisis-marxista-del-desarrollo-econ%C3%B3mico-del-capitalismo-en-el-per%C3%BA>.
- Lynch Gamero, Nicolás Javier. *La Transición Conservadora*. El zorro de abajo ediciones, 1992.
- Ortiz de Zevallos, Felipe. "Don Walter Piazza Tangüis". *Suplemento Especial de COSAPI*, https://www.cosapi.com.pe/Upload/revista/archivo/especial_cosapi_interiores_.pdf.
- Rojas, Rolando. *Los años de Velasco*. Instituto de Estudios Peruanos, 2024.
- Stephens, Evelyn Huber. "El gobierno militar peruano, la movilización obrera y la crisis social". *Cuadernos Políticos*, <http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.37/CP37.8EvelyneHuberStephens.pdf>.

Sulmont Samain, Denis. *Historia del movimiento Obrero peruano*. Tarea, 1981.

Valladares, Manuel. *El Paro Nacional del 19 de julio de 1977*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013.

Wiener, Hugo. "Martes 19 de julio de 1977". *Blog Personal*, 22 junio 2023, <http://blog.pucp.edu.pe/blog/dolaragujereado/2023/06/23/martes-19-de-julio-de-1977>.

Zapata Velasco, Gastón Antonio. "Javier Silva Ruete y el Ministerio de Economía en 1978". *Blog Clioperu*, 25 septiembre 2012, <http://clioperu.blogspot.com/2012/09/javier-silva-ruete-y-el-ministerio-de.html>.

---. *La caída de Velasco*. Taurus, 2018.